

SESIONES

DE LA

DIPUTACION PERMANENTE DE CORTES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIEGO MARTINEZ BARRIO

Sesión del miércoles 14 de Julio de 1937

SUMARIO

Abierta la sesión a las doce y veinte minutos, se lee y aprueba el acta de la anterior.

Sustitución de D. Ramón González Sicilia por D. Manuel Torres Campaña en la Diputación permanente: comunicación.—Acuerdo.—Toma de posesión.

Designación de Secretario y Vicesecretario de la Diputación permanente.—Manifestaciones y propuestas de los Sres. Santaló, Presidente y De Francisco.—Acuerdo.

ORDEN DEL DIA.—Fallecimiento de D. Serafín Ocón y dimisiones de los Sres. D. José Centeno y D. Juan Simeón Vidarte: comunicación de la Comisión permanente del Tribu-

nal de Cuentas.—Manifestaciones del señor Velao.—Intervención del Sr. Palomo.—Contestación del Sr. Presidente.—Rectificaciones de los Sres. Palomo y Presidente.—Nueva rectificación del Sr. Palomo.—Manifestaciones del Sr. Corominas.—Rectifica el Sr. Palomo.—Manifestaciones de los Sres. Fernández Clérigo y Presidente.—Acuerdo.

Prórroga del estado de alarma: comunicación.—Acuerdo.

Visita de los diputados a las zonas del territorio leal.—Manifestaciones de los Sres. Santaló, Presidente y Largo Caballero.—Rectificación del Sr. Presidente.

Se levanta la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos.

Abierta la sesión a las doce y veinte minutos, en segunda convocatoria, con asistencia de los Sres. Fernández Clérigo, Valentín, Pascual Leone, Palomo, Pérez Urria, Araquistain, Tejero, Vargas, Largo Caballero, De Francisco, Tomás Taengua, Corominas, Santaló y Velao, se leyó y fué aprobada el acta de la anterior.

Se dió cuenta de una comunicación de la minoría de Unión Republicana, proponiendo sea designado Vocal de la Diputación Permanente de Cortes D. Manuel Torres Campaña para cubrir la vacante producida por el Sr. González Sicilia.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Se aprueba la designación hecha por la minoría de Unión Republicana? (Asentimiento.) Queda aprobada. Se invitará al Sr. Torres Campaña, a fin de

que tome posesión del cargo para el que ha sido propuesto. (Pausa.—Entra en el salón el señor Torres Campaña.) Se da, por consiguiente, posesión del cargo de Vocal de la Diputación Permanente al Sr. Torres Campaña.

Por ausencia y dimisión del Sr. Tomás y Piera se halla vacante el cargo de Secretario de la Diputación Permanente. Viene ejerciendo tal función el Vicesecretario, Sr. Pascual Leone. Creo que convendría proceder al nombramiento de Secretario con carácter definitivo, ante la probabilidad de que, en algún momento, no pueda actuar el Diputado Vicesecretario.

El Sr. SANTALÓ: Todos conocemos las condiciones que reúne el Sr. Pascual Leone, y por el tanto que podría ser nombrado para desempeñar el cargo de Secretario.

El Sr. **PRESIDENTE**: En ese caso quedaría vacante el puesto de Vicesecretario, y la Diputación Permanente se tendría que pronunciar en el sentido de nombrar a un compañero que ejerza esa función.

El Sr. **DE FRANCISCO**: Nuestro criterio es que uno de estos puestos lo ocupe un miembro de Esquerra Republicana y que, por lo tanto, debería ser designado para Vicesecretario, en el caso de que fuera nombrado Secretario el señor Pascual Leone, el Sr. Santaló.

El Sr. **PRESIDENTE**: Entonces, ¿aprueba la Diputación Permanente que el Sr. Pascual Leone pase a ocupar el cargo de Secretario y el Sr. Santaló el de Vicesecretario? (**Asentimiento.**) Queda aprobado."

ORDEN DEL DIA

Leída una comunicación de la Comisión Permanente del Tribunal de Cuentas dando conocimiento del fallecimiento del Ministro del propio Tribunal, D. Serafín Ocón y Alonso Barroeta, y de las dimisiones presentadas por el Ministro Letrado D. José Centeno, y el Fiscal D. Juan Simeón Vidarte, dijo:

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Algún Sr. Diputado desea hacer uso de la palabra sobre la comunicación que acaba de leerse?

El Sr. **VELAO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **VELAO**: En vista de lo tratado por los distintos partidos acerca de los cargos vacantes del Tribunal de Cuentas, mi opinión es que, con el fin de tener un más amplio conocimiento de la cuestión y poder resolver con el mayor acierto, quede sobre la mesa para que sea debatida en una reunión próxima.

El Sr. **PALOMO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **PALOMO**: Yo rogaría al Sr. Presidente que, estando conformes con lo expuesto por el Sr. Velao, las distintas minorías se pusieran de acuerdo y dieran los nombres de los sustitutos, pero que lo hicieran con alguna celeridad, porque en el Tribunal de Cuentas hay una plaza—la de Fiscal—de extraordinaria importancia. Para la de Ministro podría esperarse más, aun siendo necesaria; pero la de Fiscal, repito, es de absoluta necesidad, pues la propia Comisión parlamentaria tiene hecha una petición a la Fiscalía de aquel Tribunal respecto al personal de la misma, y dicho se está que, no hallándose en activo la de Fiscal, no podrán los funcionarios dar esa relación pedida. Es decir, que queda incumplida la petición de la Comisión parlamentaria.

Por tanto, yo rogaría a la Presidencia que, con la mayor celeridad posible, se resolviera esta cuestión.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tramitación reglamentaria de este asunto es la siguiente: Cuando la Comisión del Tribunal de Cuentas sabe que se ha producido una vacante, está en la obligación de dar noticia de ello a las Cortes o, en su caso, a la Diputación Permanente.

En el presente momento ese trámite reglamentario ha sido cumplido. Las Cortes o la Diputación Permanente, en su caso, declaran la vacante, y, declarada que sea, es la propia Comisión del Tribunal de Cuentas la que hace la propuesta en orden a la persona que haya de cubrir la vacante; propuesta que pasa a las Cortes o a la Diputación Permanente. Y el trámite reglamentario ahora es el de que la Diputación Permanente, en función de Cortes, declare esas vacantes producidas en el Tribunal de Cuentas, pasando la noticia de este acuerdo a la Comisión Permanente del propio Tribunal.

El Sr. **PALOMO**: De todas maneras, si me permite el Sr. Presidente, para la provisión del puesto de Fiscal hay un inconveniente, y es que la Comisión no tiene potestad para nombrarlo, sino que tienen que ser las Cortes.

El Sr. **PRESIDENTE**: El artículo 124 del Reglamento del Congreso dice: "Los nombramientos de Presidente, Ministros, Fiscal y Secretario del Tribunal de Cuentas se harán por las Cortes a propuesta de la Comisión". El precepto es claro.

El Sr. **PALOMO**: No me ofrece ninguna duda la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, porque dice: "El nombramiento y la separación de Presidente, Ministro y Secretario general se harán por las Cortes, a propuesta de la Comisión que determine el Reglamento de la Cámara, o por la Diputación Permanente cuando las sesiones estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta". Pero en el caso del Fiscal dice: "Asimismo podrá ser ejercido por un Diputado, designado tan pronto como se constituyan definitivamente las Cortes en la primera legislatura de cada Diputación, y desempeñará su puesto hasta que sea elegido por las Cortes siguientes el Diputado que haya de sustituirle. La elección en este caso, o cuando con ocasión de vacante sea forzoso reemplazarlo, se hará papeleta". Es decir, desglosa la facultad de designación del Fiscal de la de Presidente y Ministros. Es cierto que en el artículo 3.º no se incluye al Fiscal; pero también lo es que en un párrafo de otro artículo—el quinto—se dice que, para nombrar Fiscal, la elección se hará por papeleta. La interpretación que doy, y conmigo el pleno del Tribunal, inclu-

so la Fiscalía, es la de que la ley—claro es que nosotros podríamos modificarla—, al no incluir al Fiscal en este conglomerado de Presidente, Ministros y Secretario general, y hablar de él en párrafo de otro artículo para decir que su elección habrá de realizarse por papeleta, estima que deben ser las Cortes las que lo hagan. Ahora bien; cabe cualquier otra interpretación de la ley.

El Sr. **COROMINAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **COROMINAS**: A mi juicio está claro que en esto no hemos de ver más de lo que aquí se dice. Lo que la ley hace, única y estrictamente, es marcar el procedimiento para la elección por papeleta; pero no dice que el órgano encargado de hacer esa designación no sean las Cortes o su Diputación Permanente. Y si esto no lo especifica la ley, nosotros no tenemos por qué hacerlo.

El Sr. **PALOMO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **PALOMO**: Acepto la interpretación que da el Sr. Corominas, pues además sirve las apetencias del propio Tribunal, que desea se nombre el Fiscal lo antes posible. Pero me parecía un deber elemental señalar que la interpretación que invariablemente da el Tribunal es la de que el cargo de Fiscal, por ser nombramiento de las propias Cortes y representantes de éstas, debe ser desglosado de este conglomerado de Presidente, Ministros y Secretario general y que sean las propias Cortes las que hagan la designación para que exista toda suerte de garantías. Ahora bien; la interpretación que se da, relativa a que sea la Diputación Permanente la que resuelva, no me parece caprichosa, sino que la encuentro muy bien.

El Sr. **FERNANDEZ CLERIGO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **FERNANDEZ CLERIGO**: Naturalmente que si hay alguna discrepancia entre lo que establece el Reglamento de las Cortes y el Reglamento orgánico del Tribunal de Cuentas, la solución debe ser de acuerdo con el Reglamento de las Cortes, el cual, indudablemente, desvanece la duda que plantea el Sr. Palomo.

Existe, pues, una perfecta competencia en la Diputación Permanente de Cortes para hacer el nombramiento de Fiscal.

Por otra parte, no se me alcanza cuál es el móvil que ha inducido a estampar en ese Reglamento el que para el nombramiento de Fiscal sean precisos estos trámites, que no se han de llenar para el de Presidente, cargo de mucha mayor calificación. Y, ateniéndose al Regla-

mento de la Cámara, creo que la Diputación Permanente tiene facultades; pero si alguna duda cupiese y se quisieran cumplir todos los requisitos para conciliar ambos criterios, bastaría con que, como ha dicho el Sr. Corominas, dentro de la Diputación Permanente se procediese a la elección del Fiscal por papeletas. Con ello creo que quedarían disipadas todas las dudas que se han expuesto.

El Sr. **PRESIDENTE**: Téngase en cuenta que no se puede establecer paridad entre el rango del Reglamento de las Cortes y el del Tribunal de Cuentas, porque el Reglamento de las Cortes es una ley, mientras que el del Tribunal de Cuentas, como los que afectan a todos los Ministerios y demás órganos de la Administración, son funciones regladas y los hace libremente el Ministro. (El Sr. **PALOMO**: Es la ley orgánica del Tribunal.) A mayor abundamiento, he de decir que la ley orgánica del Tribunal de Cuentas de la República tiene fecha 9 de Junio de 1934 y que el Reglamento del Congreso de los Diputados lleva la de 25 de Noviembre del mismo año. Es decir, el Reglamento de la Cámara es posterior a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, y si ha impuesto en esta u otras leyes alguna modificación ésta tiene plena vigencia, porque el último acto legislativo de las Cortes en relación con aquella ley orgánica es el Reglamento del Congreso de los Diputados.

Creo que incluso tiene mayor rango el propio Reglamento del Congreso de los Diputados que la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Pero si no lo tuviera, en este caso concreto resultaría que, siendo dicha ley posterior al Reglamento del Congreso de los Diputados, la habría éste derogado en lo que respecta a este extremo.

¿Se estima, pues, que se dé cuenta a la Comisión de este Tribunal para que haga la propuesta marcada en el art. 124? (**Asentimiento.**) Así se acuerda.)"

Se leyó la siguiente comunicación:

"Excmo. Sr.: Considerando necesario el Gobierno prorrogar por treinta días más el estado de alarma que se declaró en 17 de Febrero de 1936 en todo el territorio nacional y plazas de soberanía, Ceuta y Melilla, con sujeción a lo preceptuado en la vigente ley de Orden público, tengo el honor de ponerlo en conocimiento de V. E. a los efectos de la autorización prevenida en el art. 42 de la Constitución.

Madrid, 10 de Julio de 1937.—el Presidente del Consejo de Ministros, **NEGRIN**."

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Ningún señor Diputado quiere hacer uso de la palabra? (**Pausa.**)

¿Se acuerda conceder la autorización solicitada

por el Gobierno? (**Asentimiento.**) Queda acordado.

El Sr. **SANTALO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **SANTALO**: No sé si es este el momento apropiado para plantear la cuestión a que voy a referirme o si habría de hacerlo particularmente a la Presidencia.

Ocurre—ignoro si a alguno de los compañeros le habrá sucedido también—que para viajar por las provincias leales se tropieza frecuentemente con alguna dificultad, pues hay elementos a los que no les basta la condición de diputados para permitir la visita de determinadas zonas; y yo creo que no puede haber duda respecto a la utilidad de que por nosotros pueda recogerse, en algún momento, información de indudable interés para la política de la República.

Para viajar por algunos sitios hay quien cree que se necesita un permiso especial. Estos permisos eran antes facilitados por organizaciones políticas—partido socialista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, etc.—, pero, en la actualidad, parece que se exige que esa autorización la otorgue la Dirección general de Seguridad.

Supone una merma en las atribuciones de los Diputados, pues no se trata solamente de un derecho, sino del deber que tienen de acudir a informarse donde creen que pueden hallar nuevos elementos de juicio, el hecho de que por la Dirección general de Seguridad se extendiera una autorización para que los Diputados pudieran acudir donde estimaran conveniente con objeto de recoger los elementos de juicio que creyeran necesarios para el debido cumplimiento de su misión.

El Sr. **PRESIDENTE**: Me parece que ese derecho de los señores Diputados circunstancialmente puede tener un límite, que es el que marca la seguridad y el sigilo con que se realicen las operaciones militares. De modo general creo que los Diputados tienen perfectísimo derecho a visitar todo el territorio que está en manos de la República, pero puede llegar un momento en que el acceso a una parte de ese territorio sea negado por el Poder Ejecutivo en razón a las circunstancias que se den en el instante en que ese deseo o ese derecho sea manifestado.

Sin embargo, si la Diputación Permanente así lo estima, yo, haciéndome eco de las manifestaciones del Sr. Santaló, daré cuenta al señor Presidente del Consejo de Ministros de este de-

seco de la Diputación Permanente, para que, de acuerdo con la Presidencia de la Cámara, vea la manera de arreglarlo llegando a una solución armónica que, sin mermar el derecho de los Diputados, ponga a salvo también el legítimo que tiene el Poder ejecutivo para que, en un momento determinado, las operaciones militares se realicen sin dificultad posible.

El Sr. **LARGO CABALLERO**: El Presidente ha venido a resolver algo de lo que yo pretendía indicar.

Me parecía haber oído decir al Sr. Santaló que la Dirección general de Seguridad diera una autorización a los Diputados, y a eso es a lo que yo me iba a oponer. Nosotros no tenemos nada que ver con la Dirección general de Seguridad. En todo caso, como ha dicho muy bien el Sr. Presidente, se puede dirigir al Presidente, se puede dirigir al Presidente del Gobierno para que éste, con arreglo a la situación planteada, decida.

Ahora, en principio, creo que todo representante del país tiene perfecto derecho a verlo todo, absolutamente todo; porque una de las obligaciones de los Diputados es fiscalizar la actuación del Gobierno y, naturalmente, si no se les permite que se enteren cómo se procede en los frentes, no pueden fiscalizar nada. Claro que el Gobierno puede tomar medidas, pero se expone a que luego en el Parlamento se le pidan explicaciones.

Yo creo que todo esto se puede resolver con que el Presidente de las Cortes se dirija al del Gobierno en el sentido indicado, pero sin mezclar para nada a la Dirección general de Seguridad.

El Sr. **PRESIDENTE**: Desde luego, la gestión que, si la conformidad de la Diputación permanente es plena, tiende a realizar la Presidencia, es la de acercarse al Jefe del Gobierno, de acuerdo con la Cámara, claro está, que pueden realizar su gestión fiscalizadora e informativa los señores Diputados.

Creo que el Jefe del Gobierno dirá que con libertad. Quizá le parezca oportuna alguna restricción, pero si se establece ha de ser referida a un momento y no al propio normal desenvolvimiento de la función. Y, positivamente, los señores Diputados, y en representación de ellos el Presidente de la Cámara, no tienen por qué hablar con la Dirección general de Seguridad a estos efectos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión."

Eran las doce y cuarenta y cinco minutos.